



CONTEXTO 11 MACROECONÓMICO

Perú experimenta una recuperación económica moderada tras los efectos de la pandemia y la crisis política interna que afectó su estabilidad en años recientes.

Este año, diversos riesgos asociados a factores externos como la incertidumbre del impacto de las medidas que aplicaría la nueva administración en los Estados Unidos, los riesgos de tensiones geopolíticas y la desaceleración del crecimiento económico global incrementarían la volatilidad de los mercados financieros internacionales y afectarán la demanda externa de nuestros productos de exportación. Además, en el plano local, la proximidad al periodo electoral y un incremento de la incertidumbre política y social podrían acrecentar el riesgo país, lo que, a su vez, puede inducir la salida de capitales.

Para 2025, se espera que el Producto Interno Bruto (PBI) crezca a un ritmo de alrededor del 3%¹ asumiendo condiciones económicas favorables para el agro y la pesca, así como un entorno de estabilidad sociopolítica. Esta tasa es relativamente baja comparada con su crecimiento previo a la pandemia, pero aún positiva en un contexto global desafiante.



CONTEXTO MACROECONÓMICO

Se espera que este año la inflación se mantenga en el rango meta, alrededor de 2%. Un entorno de precios más estable facilita la previsibilidad de los costos a largo plazo, tanto para las empresas del sector de infraestructura como para los inversionistas y permite una mejor planificación de los costos operativos y de construcción.

El sol peruano fue la única moneda con tendencia a la apreciación en la segunda mitad de 2024. Una moneda fuerte favorece la importación de equipos, tecnología y materiales necesarios para los proyectos de infraestructura.

No obstante, se mantiene bajo la incertidumbre política interna y los flujos internacionales, aunque se espera cierta estabilización en 2025 a medida que las expectativas del mercado se ajusten a la nueva situación política y económica del país.

Perú tiene una de las tasas de interés de referencia más bajas de Latinoamérica. Sin embargo, las presiones inflacionarias y aumentos de tasas de interés a nivel global y local podrían afectar el costo de financiamiento de los proyectos de infraestructura, particularmente en un entorno de alta volatilidad política. Esto podría generar un alza en los costos operativos, lo que afectará la rentabilidad de los proyectos en ejecución o en planificación.



SITUACIÓN POLÍTICA Y REGULACIÓN DEL SECTOR

La inestabilidad política es uno de los principales riesgos para la inversión en infraestructura en Perú. Si bien la transición política parece haberse estabilizado con el nuevo gobierno, las tensiones políticas internas, los cambios en las políticas públicas y la inestabilidad social continúan siendo factores a tener en cuenta.

A pesar de ello, se observan esfuerzos en la reactivación de proyectos de infraestructura en sectores clave como electricidad, transporte y saneamiento. El gobierno ha mostrado interés en mejorar la infraestructura básica, especialmente en áreas de regiones rurales y en las principales ciudades, mediante iniciativas de Asociaciones Público-Privadas (APP). No obstante, la burocracia, la lentitud en los procesos de aprobación y la falta de predictibilidad regulatoria siguen siendo obstáculos significativos.

A nivel de políticas ambientales, Perú ha suscrito compromisos internacionales en torno a la sostenibilidad, por lo que es probable que haya un mayor impulso a proyectos que estén alineados con la transición energética, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Un reto es adoptar medidas normativas y regulatorias que impulsen la inversión, no que la retrotraigan.





87%
GOBIERNOS
LOCALES

8%
GOBIERNOS
REGIONALES

5%
GOBIERNOS
NACIONAL

RETOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Banco de Inversiones del MEF, al 13 de diciembre de 2024, registraba 199 488 proyectos viables y activos de más de un billón de soles de costo actualizado. El 87% de proyectos corresponde a los gobiernos locales, el 8% a los gobiernos regionales y 5% al gobierno nacional.

El Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP ocupa el 52% del universo de estos proyectos y el Invierte.pe, el 48%.

Sin embargo, solo 158 901 proyectos registran devengado, es decir, ejecución financiera. En promedio, toma 14 meses para que un proyecto del gobierno nacional inicie devengado desde la fecha de viabilidad, en el caso de los gobiernos regionales 15 meses y en los gobiernos locales, 10 meses. No obstante, existen 11 563 proyectos de inversión pública viables que llevan más de 3 años desde su viabilidad y que aún no registran devengado, cuyas inversiones representan 91 635 millones de soles. Además, existen 66 115 proyectos con menos de 95% de devengado acumulado que no reportan gasto desde antes de 2022.



En 2024, se devengaron recursos en 28 299 proyectos de inversión pública de los cuales solo 4 852 registraban más de 95% de devengado acumulado. Solo 26% de estos proyectos fueron considerados en presupuesto de 2025.

9 197 proyectos registraron su primer devengado en 2024. De este grupo 201 reportan más de 95% de avance acumulado y corresponden casi en su totalidad a proyectos de los gobiernos locales de 3.5 millones de soles cada uno en promedio.

La inversión pública ejecutada en 2024 al cierre del año ascendió a 57 686 millones de soles, que representa una ejecución del 82.4% del presupuesto. Para el 2025, la Ley de Presupuesto Público estableció un presupuesto para proyectos de 55 741 millones de soles, distribuidos entre los tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional (44%), Gobiernos Locales (29%) y Gobiernos Regionales (28%).

ESTAS CIFRAS DAN UNA IDEA
DE LAS AMPLIAS NECESIDADES
DE RECURSOS PARA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA.
PESE A ELLO EXISTE UNA
TENDENCIA CRECIENTE A
SEGUIR DESARROLLANDO
PROYECTOS VÍA ACUERDOS
GOBIERNO A GOBIERNO (G2G).
HASTA EL MOMENTO LOS
PROYECTOS ENMARCADOS EN
G2G REPRESENTAN MÁS DE 68
600 MILLONES DE SOLES DE
INVERSIÓN².



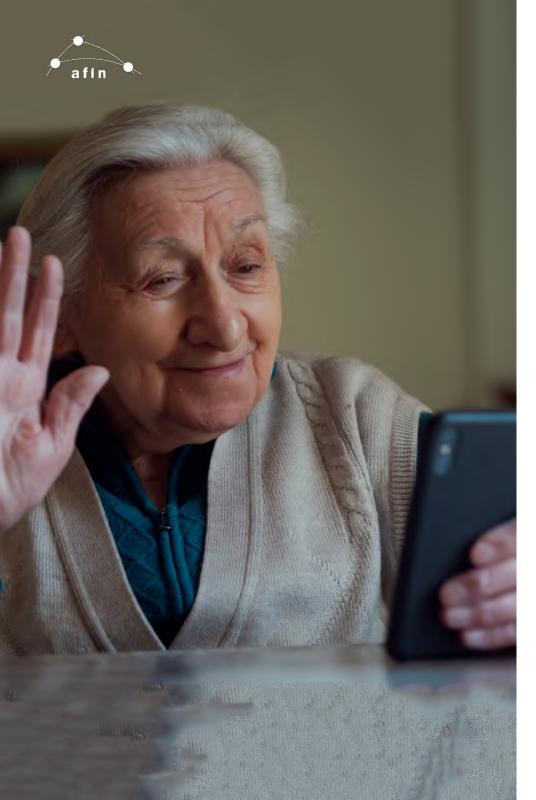
Contrario a lo que podrían creer muchos, los G2G no consisten en que una nación extranjera construya proyectos de ingeniería compleja que el Estado Peruano no podría. De hecho, el 28% de este monto corresponde a proyectos de infraestructura social (salud y educación). El Estado suscribe estos G2G no porque no sepa construir colegios y centros de salud y hospitales, sino porque así puede saltarse los intrincados procesos de la normativa que se autoimpone. Sin embargo, los problemas de gestión existen en todas las modalidades de inversión y en todos los sectores.





- Se anuncian más proyectos a realizarse por G2G: las líneas 3 y 4 del metro de Lima y Callao, el Ferrocarril Lima – Ica, los hospitales Manuel Nuñez Butron de Puno, Guillermo Díaz de la Vega de Abancay y el Nuevo Hospital de Andahuaylas, y proyectos de irrigación como Alto Piura y Majes Siguas.
- El horizonte de los proyectos G2G termina con la construcción y no se están tomando acciones para la concesión de la etapa operativa (incluyendo el componente de mantenimiento) de los proyectos culminados (por ejemplo: de Escuelas Bicentenario y de salud y educación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, salvo el Hospital de Sullana), lo que implica que estarán bajo la gestión pública aun cuando las brechas existentes demuestran la falla de ese modelo.
- Con respecto a la inversión privada, existen contradicciones que deterioran el desarrollo de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) en ejecución y de nuevas adjudicaciones. La inseguridad jurídica sigue siendo una de las principales preocupaciones de los inversionistas en Perú. La lentitud en los procesos de licitación, la falta de certeza en la interpretación de las leyes y las demoras en la obtención de permisos dificultan la ejecución de proyectos. Las disputas legales y las protestas sociales pueden interrumpir el avance de las obras, lo que eleva el riesgo para los inversionistas.





TELECOMUNICACIONES

Se observa un exceso de carga al sector. Por ejemplo, se le atribuyen responsabilidades por temas de seguridad ciudadana que es competencia de otro sector (Interior) y no solucionan la raíz del problema. Esto genera sobrecostos a la industria, vulnera la seguridad de los abonados y daña la reputación empresarial y del personal de las operadoras por eventos en los que no tienen injerencia (similar a castigar al pequeño comerciante que le vendió una navaja a alguien que la usó para delinquir, en vez de enfrentar la delincuencia).



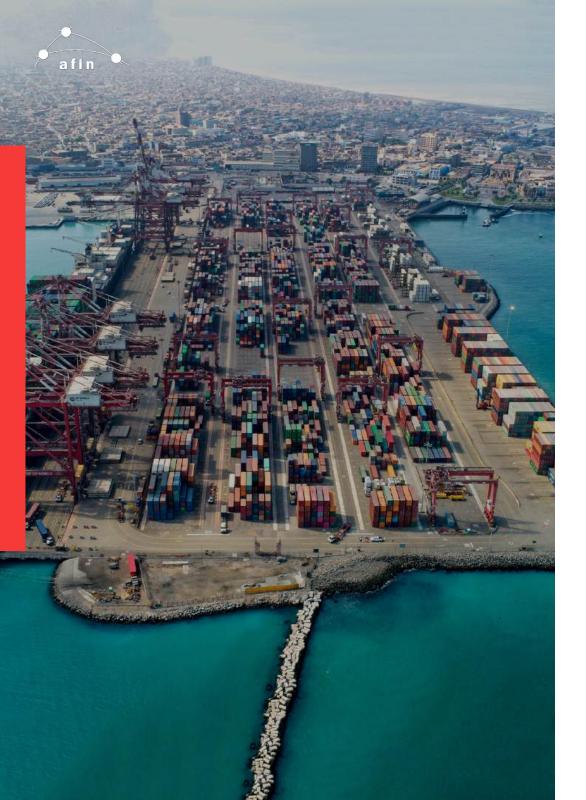
SECTOR VIAL

Además de la liberación de áreas e incumplimientos del Estado, persiste la constante amenaza a la seguridad jurídica de los contratos de concesión y al respeto de los laudos arbitrales. Por un lado, se pretende adjudicar paquete de proyectos viales en ProInversión pero del otro, una municipalidad provincial implementa una ruta alterna empleada para evadir el peaje en un tramo entregado en concesión por el MTC. Lo que no se explica es que, a menor recaudación de esa garita, mayor será lo que terminaremos financiando todos los contribuyentes (inclusive quienes no usen la vía). Se requiere trabajar en coordinación con el concedente para terminar de ejecutar los proyectos concesionados en ejecución que se encuentran pendientes.



AEROPUERTOS

Esteaño inicia el funcionamiento del nuevo terminal de pasajeros del Jorge Chávez representa un importante desafío para la red de actores involucrados (públicos y privados), con una serie de riesgos ajenos al control del concesionario, como por ejemplo deficiencias en los accesos y en la actuación de las instituciones públicas. Se requiere priorizar y acelerar la modernización de aeropuertos regionales. De otro lado, se requiere fortalecer la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que debería pasar a convertirse en el equivalente de la Autoridad Portuaria Nacional.



PUERTOS

Desarrollo de una visión de **Ciudad- Puerto** con enfoque territorial en todos los puertos (concesionados o no), lo cual involucra infraestructura logística, incluyendo conectividad vial y seguir ejecutando las inversiones pendientes de los proyectos en marcha.



ELECTRICIDAD

Ha representado la mayor parte de los nuevos proyectos adjudicados en los últimos años. Este año inició la vigencia del plan de transmisión 2025-2034 que comprende 19 proyectos de transmisión, entre los que se destacan: Enlace 500 kV Colectora-Bicentenario-Chilca, Enlace 500 kV Miguel Grau - Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, Enlace 220 kV Tintaya Nueva - Nueva San Gabán, Subestación Hub Poroma (Segunda Etapa) patio de 220 kV y transformación 500/220 kV. Asimismo, las fallas en distribución eléctrica (cortes de luz) impacta en otros sectores (por ejemplo, en telecomunicaciones).



HIDROCARBUROS

Se debe dejar de presionar las finanzas públicas con salvatajes a Petroperú que amenazan la sostenibilidad fiscal. No se está promoviendo la actividad exploratoria, primera actividad de la cadena. De otro lado, la discrecionalidad en las adjudicaciones de lotes, sin procesos competitivos y con poca transparencia, es perjudicial para el país. Además, debe continuar el proceso de masificación del gas natural, y debe avanzarse en el sistema de transporte de este recurso que se encuentra pendiente.









INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Por un lado, tenemos experiencias exitosas de concesiones en salud que pueden replicarse, tales como los hospitales concesionados Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) y la logística de medicamentos de EsSalud en Lima y Callao. Se están avanzando en los hospitales concesionados de Piura y Chimbote. COAR Centro, la primera concesión en educación, completó los Estudios de Detalle de Ingeniería (EDI) y debe continuar avanzando mediante un trabajo articulado entre el concesionario y el Minedu. Por otro, se evidencia una debilidad institucional que afecta finalmente a los pacientes de EsSalud. Asimismo, se esperan avances de la cartera de ProInversión, como la entrega de un paquete de 13 locales en riesgo en Lima Metropolitana, pero debe avanzarse con los demás ubicados en Lima y Cusco que llevan más de 10 años desde su admisión en ProInversión.

TRANSPORTE URBANO

Inició operaciones el terminal de Chimpu Ocllo del Metropolitano, pero existen asuntos pendientes por resolver tales como las renovaciones de flota y el pago de laudos arbitrales. En la ejecución de la Línea 2 se requiere la entrega de áreas para la ejecución de obras, así como de información técnica suficiente para su integración con la Línea 1. De otra parte, se espera el lanzamiento de la Tarjeta Interoperable de Transporte que integrará Línea 1, Línea 2, Metropolitano y corredores complementarios.

Chimpu Octlo







OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Desde 2023 a la fecha se han adjudicado 6 867 millones de dólares³ en 13 procesos de nuevos proyectos de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos que involucran 29 infraestructuras. La mayoría de las nuevas adjudicaciones corresponden al subsector de transmisión eléctrica.

Para el presente año está pendiente la suscripción de contratos de algunos de los proyectos adjudicados en 2024 (1 041 millones de dólares): Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, Enlace 220 KV Aguaytía – Pucallpa, Incremento de la confiabilidad 138-60KV del Sistema Eléctrico de Tarma – Chanchamayo y el Incremento de capacidad y confiabilidad (Criterio N-1) de suministro del Sistema Eléctrico Huaraz (Proyecto ITC).



Pese a los desafíos, existen áreas clave en las que el sector de infraestructura en Perú presenta un alto potencial de inversión en 2025:



Perú ha avanzado en su transición hacia energías más limpias, y se prevé que la inversión en energía solar, eólica y el almacenamiento de energía continúe siendo un sector estratégico. Proyectos en el sur y norte del país, donde la radiación solar y los vientos son abundantes, serán áreas clave. Para este año se espera la adjudicación de: Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana (Arequipa), Enlace 220 kV Planicie – Industriales (Lima), Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas (Apurímac), Enlace 138 kV Derivación San Rafael – Ananea (Puno).



En un país con grandes disparidades entre áreas urbanas y rurales, las inversiones en infraestructura de agua y de saneamiento continúan siendo prioritarias. El acceso al agua potable y la mejora de la infraestructura sanitaria son esenciales para el bienestar social y la estabilidad política. Se espera la adjudicación de los proyectos de tratamiento de aguas residuales de: Chincha (adjudicado en enero), Cajamarca, Huancayo, San Martín, Puerto Maldonado, Trujillo, Cusco; y desaladora llo.



Se requiere expandir la frontera de agrícola, que permitirá impulsar el sector agroexportador, para lo cual se requieren importantes inversiones para el cierre de la brecha de infraestructura de riego. Sin embargo, no se estructuran megaproyectos de irrigación. Existe desarticulación entre proyectos de diferentes sectores y entidades. Se requiere la alineación de los diferentes niveles de gobierno con las políticas de Estado, y evitar su uso como instrumento político. En ProInversión se encuentran Chinecas y Chavimochic III (canal madre), ambos en formulación, y el sistema hídrico del Valle Chancay – Lambayeque que continúa en planeamiento desde hace años.



Pese a los desafíos, existen áreas clave en las que el sector de infraestructura en Perú presenta un alto potencial de inversión en 2025:



La expansión y mejora de la infraestructura de transporte, especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo, sigue siendo una prioridad. Los proyectos de transporte público y movilidad urbana sostenible, como el metro de Lima y corredores segregados, seguirán siendo importantes. Además, las inversiones en infraestructura vial y portuaria son fundamentales para la integración del país con los mercados internacionales. Se espera la adjudicación de: Longitudinal de la Sierra Tramo 4, el grupo 1 de corredores viales (7 proyectos) y Terminal Portuario de Chimbote.



La expansión de la infraestructura digital es otra área de gran potencial de inversión. La implementación de redes 5G y el aumento de la conectividad en regiones remotas representan una oportunidad clave para mejorar la competitividad del país y fomentar la inclusión social y económica. La mejora de la infraestructura digital también es esencial para el desarrollo de las ciudades inteligentes y el uso de tecnologías emergentes en la gestión de los servicios públicos. Sin embargo, todo lo anterior se ve limitado por la brecha de infraestructura de telecomunicaciones. Además, está pendiente la adjudicación de las bandas de frecuencias 3.5 y 26 GHz que permitirán aumentar el espectro radioeléctrico que favorece el despliegue del 5G.



Se espera la adjudicación de la operación y mantenimiento del nuevo Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Gestión del Instituto Nacional del Niño de San Borja, Colegios en riesgo Lima Metropolitana (13 locales escolares en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores). También se están promoviendo la adjudicación de la operación y mantenimiento del Hospital de Cajamarca de EsSalud y del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana (este último ejecutado en marco de G2G de la ARCC). Se deben impulsar otros proyectos que también llevan años en gestación, tales como: el Nuevo Hospital Militar Central, la gestión de integral de residuos sólidos de los establecimientos de salud del MINSA en Lima Metropolitana, y los demás colegios en riesgo de Villa María del Triunfo, Comas, San Martín de Porres, Ate, San Juan de Lurigancho y Cusco.

RECOMENDACIONES

Fomentar Alianzas Público-Privadas (APP)

Dada la falta de recursos fiscales para financiar grandes proyectos de infraestructura, las asociaciones público-privadas serán clave, además que aseguran la operación y mantenimiento de la construcción para evitar que se pierdan en el tiempo.

Invertir en innovación y sostenibilidad

La integración de tecnologías inteligentes en la infraestructura, como redes eléctricas inteligentes, plataformas de movilidad sostenible y el uso de energías renovables, será una ventaja competitiva.

Capacitación y Gestión de Riesgos

La capacitación en gestión de riesgos, manejo de conflictos sociales y la adopción de prácticas más transparentes en la ejecución de proyectos son esenciales para superar las barreras que presenta el entorno actual.

Reducir la atomización presupuestal

Repensar el diseño institucional del presupuesto e inversión públicos optimizando el número de procesos y actores. La creación de nuevos pliegos y unidades ejecutoras per sé no conducen a una mejor gestión de recursos y proyectos.